



*Cámara Federal de Casación Penal*

Registro N° 1021/23

///la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, se reúne la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Mariano Hernán Borinsky, Daniel Antonio Petrone y Gustavo M. Hornos asistidos por la Secretaria actuante, con el fin de dictar sentencia en la causa **FSM 72713/2019/3/CFC1, caratulada "NORDEL MOVIE S.A. Y OTRO s/infracción ley 24.769"**. Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Javier Augusto De Luca; ejerce la defensa particular de "Nordel Movie S.A." y de Ramón Eduardo Dos Santos, el Dr. Darío Germán Debayle; y representa a la querella -A.F.I.P.- el Dr. Leonardo Torres.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el orden siguiente: doctores Borinsky, Petrone y Hornos.

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

El señor juez **doctor Mariano Hernán Borinsky** dijo:

**PRIMERO:**

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Cámara a raíz del recurso de casación deducido por la querella -A.F.I.P.- contra la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, que en fecha 1° de noviembre de 2022 resolvió: **"CONFIRMAR** el auto apelado en cuanto fuera materia de recurso"; auto mediante el cual el juez de grado había decidido: **"I. SUSPENDER EL TRÁMITE** del presente expediente nro. **FSM 72713/2019/2**, de este Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 3 de [Morón] y de la prescripción penal, en los términos y bajo las condiciones





## *Cámara Federal de Casación Penal*

estipuladas en la presente resolución, respecto de los períodos aquí comprendidos, debiendo tomarse como punto de partida el día 28/04/2022, fecha de acogimiento de plan Q211080 del régimen de regularización".

La cámara a quo -en fecha 23 de noviembre de 2022- no hizo lugar al recurso de casación interpuesto, lo que motivó la presentación en queja ante esta instancia.

Esta Sala III -con una integración parcialmente diferente- hizo lugar a la queja interpuesta, sin costas, y concedió el recurso de casación articulado contra la decisión impugnada (cf. causa FSM 72713/2019/3/RH1, "Nordel Movie S.A. y otros s/queja", rta. el 14/12/2022, reg. n°1740/22).

Notificadas las partes de la radicación de los presentes actuados ante esta instancia, el impugnante mantuvo el recurso de casación.

Durante el término de oficina se presentó el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, Dr. Javier Augusto De Luca, quien solicitó que se haga lugar al recurso de casación interpuesto por la querella y se revoque la decisión impugnada.

En apoyo de su postura, señaló que el objeto de la presente causa es la presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social por parte de la empresa "Nordel Movie S.A." (artículo 7 del Régimen Penal Tributario establecido por la ley 27.430), en tanto la mencionada firma habría retenido los aportes de sus empleados en relación de dependencia con destino al Régimen Nacional de Seguridad Social y al Régimen Nacional de Obras Sociales, por los períodos fiscales que van de agosto de 2014 (08/2014) a octubre de 2018 (10/2018).





## *Cámara Federal de Casación Penal*

Además, hizo hincapié en que, de acuerdo con la información brindada por la A.F.I.P., en relación a los aportes de la seguridad social, quedan pendiente de pago los períodos 8 a 12/2014; 1/2015; 7/2015; 9/2015 a 4/2016; 7/2016 a 7/2018; 9 y 10/2018.

En ese contexto, el fiscal sostuvo que para analizar la aplicación de la ley 27.541 al caso, cabe tener en cuenta que el Sistema Único de Seguridad Social (S.U.S.S.) está compuesta por distintos subsistemas (entre ellos, el previsional, denominado SIPA; el de salud, que comprende las obras sociales, etc.) y que la omisión de aportes a dicho sistema constituye un hecho único que no puede ser escindido en "sub-hechos", en virtud de los conceptos que lo componen.

En esa línea, destacó que esta Cámara ha señalado que si bien la ley 27.541 otorga un tratamiento particularizado a los rubros que integran el S.U.S.S., ello no se traduce en una "escisión conceptual" de los distintos aportes, sino que responde a los diferentes marcos regulatorios de aquellos subsistemas, por lo que no corresponde dividir el tipo omisivo previsto por el artículo 7 del Régimen Penal Tributario (cf. causa "Jaureguiberry, Horacio Arturo s/recurso de casación" Sala IV de esta C.F.C.P., rta. el 24/10/2022, reg. n°1429/2022).

Consecuentemente, el fiscal sostuvo que la omisión imputada en este caso constituye una unidad de conducta que afecta los distintos conceptos que integran los recursos de la seguridad social, en tanto para ingresar dichos aportes el contribuyente realiza un solo pago, cuyo monto incluye los aportes con destino a los distintos subsistemas (previsional y de las obras sociales).





## *Cámara Federal de Casación Penal*

En ese sentido, cuestionó que la cámara a quo adoptara un razonamiento contrario al postulado, toda vez que analizó por separado las deudas por aportes previsionales y por aportes a las obras sociales.

En virtud de ello, el fiscal concluyó que, de acuerdo al régimen establecido en los artículos 8 y 10 de la ley 27.541 (según ley 27.562), asiste razón a la parte querellante en cuanto a que no procede en este caso suspender el trámite de la causa, dado que aún existe deuda por aportes a obras sociales respecto de los períodos 08/2014 a 12/2014; 01/2015; 07/2015; 09/2015 a 04/2016; 07/2016 a 07/2018; 09/2018 y 10/2018.

Durante la etapa prevista por el artículo 468 del código de forma, la parte querellante presentó breves notas solicitando se haga lugar al recurso interpuesto y por su parte la defensa particular solicitó su rechazo, por lo que la causa quedo en condiciones de ser resuelta.

### **SEGUNDO:**

El letrado apoderado de la querella -A.F.I.P.- encauzó su recurso de casación en los términos del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

En lo medular, se agravio de que el pronunciamiento impugnado incurrió en una errónea aplicación de la ley sustantiva, en tanto la ley 27.541 (y sus modificatorias, 27.562 y 27.563) expresamente excluye de los beneficios que prevé en su artículo 10 al delito que aquí se investiga cuando afecte aportes al Régimen Nacional de Obras Sociales.

El recurrente cuestionó los decisorios de las instancias anteriores porque -según aseveró- soslayaron la deuda que existe, en el presente caso, en el componente





## *Cámara Federal de Casación Penal*

correspondiente a aportes con destino al Régimen de Obras Sociales, evidenciando que los aludidos aportes no fueron considerados como parte del hecho único que está normado en el tipo penal del artículo 7 de la ley 27.430 (artículo 9 de la ley 24.769).

En ese sentido, sostuvo que si bien la ley 27.541 (y sus modificatorias) en su artículo 10 realiza una distinción en cuanto a las obligaciones correspondientes al Régimen Nacional de Obras Sociales, ello "*...no permite entender que se trate de una escisión del componente de aportes previsionales de los Recursos de la Seguridad Social en sí*".

La querella criticó la resolución recurrida por omitir considerar que los importes correspondientes a los aportes al Régimen de Obras Sociales para los períodos 08/2014 a 01/2015; 07/2015; 09/2015 a 04/2016; 07/2016 a 07/2018; y 09/2018 a 10/2018 se encuentran impagos.

En efecto, el impugnante tildó la resolución recurrida de arbitraria, puesto que se habría apartado de las constancias arrojadas a la causa y no constituiría una derivación razonada del derecho.

Por otra parte, el recurrente apuntó que el Juez de Grado se pronunció sin haberle dado previa intervención a su representada, de modo tal que se habría afectado el debido proceso adjetivo y cercenado el derecho de defensa.

En función de todo lo cual, la querella - A.F.I.P.- solicitó que se revoque la resolución impugnada en relación a los períodos 08/2014 a 01/2015, 07/2015, 09/2015 a 04/2016, 07/2016 a 07/2018 y 09/2018 a 10/2018.

Hizo reserva del caso federal.

### **TERCERO:**





## *Cámara Federal de Casación Penal*

**I.** Este Tribunal ya se expidió sobre la admisibilidad del remedio procesal traído a estudio, al hacer lugar a la queja interpuesta por la parte recurrente y conceder el recurso de casación, pronunciamiento al que cabe remitirse por motivos de brevedad (cfr. C.F.C.P., Sala III, causa FSM 72713/2019/3/RH1, "Nordel Movie S.A. y otros s/queja", rta. el 14/12/2022, reg. n°1740/22).

**II.** Previo a dar tratamiento a los agravios, corresponde destacar que en la presente causa se investiga la presunta comisión del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social en que Ramón Eduardo Dos Santos habría incurrido como responsable de "Nordel Movie S.A." (CUIT n°30-71112173-7), en relación a los aportes destinados al Régimen Nacional de Seguridad Social y al Régimen Nacional de Obras Sociales respecto de los períodos fiscales 08/2014 a 10/2018.

La defensa acompañó constancias de inscripción de moratorias e inscripción de reserva sistémica de plan de pagos para empresas concursadas, lo que motivó la formación de un incidente de acogimiento por moratoria a la luz de la ley 27.541.

En ese marco, a requerimiento del señor juez de grado, respecto a los aportes previsionales para los períodos 08/2014 a 10/2018 la A.F.I.P. informó que la deuda se encontraba incluida en su totalidad en el Plan N°Q211080 de la ley 27.563 con fecha de consolidación 28/04/2022 y en estado vigente; mientras que sobre los aportes a la obra social para los aludidos períodos 08/2014 a 10/2018, el fisco nacional hizo saber que solamente se encontraban cancelados los períodos 02/2015 a 06/2015, 08/2015, 05/2016 a 06/2016 y 08/2018 mediante pagos bancarios.





## *Cámara Federal de Casación Penal*

Corrida vista, el fiscal sostuvo que "...la AFIP hizo saber que la empresa Nordel Movie S.A. (CUIT nro. 30-71112173-7) regularizó el total de la deuda reclamada, mediante el plan de pagos Q211080...", en función de lo cual dictaminó que podía hacerse lugar al beneficio de suspender la acción penal conforme el artículo 10 de la ley 27.541.

Al momento de resolver, el señor juez de grado tuvo por constatado que Nordel Movie S.A. regularizó el total de la deuda reclamada mediante el plan de pago Q211080, de conformidad con los lineamientos vigentes introducidos por la ley 27.541; a partir de lo cual decidió suspender el trámite del presente expediente y de la prescripción de la acción penal "respecto de los períodos aquí comprendidos".

La A.F.I.P., en su rol de querellante, interpuso recurso de apelación.

Fundó su impugnación en que el juez de grado falló en inobservancia de la existencia de deuda en los períodos que son objeto de la presente causa (08/2014 a 10/2018), en tanto oportunamente se informó que sólo se encontraban cancelados por aportes al Régimen de Obra Social los períodos 02/2015 a 06/2015, 08/2015, 05/2016 a 06/2016 y 08/2018 quedando, por lo tanto, subsistente la deuda del resto de los períodos (08/2014 a 01/2015, 07/2015, 09/2015 a 04/2016, 07/2016 a 07/2018 y 09/2018 a 10/2018).

Asimismo, se agravio de que el decisorio atacado la habría dejado indefensa toda vez que no le fue otorgada la posibilidad de pronunciarse y de ser oída respecto de la posible aplicación de la ley 27.541 al caso, previo a que la jurisdicción se pronunciara al respecto.





## *Cámara Federal de Casación Penal*

Por otra parte, la apelante argumentó que el hecho que la ley 27.541 (y sus modificatorias), a través de su artículo 10, prevea una discriminación de las obligaciones correspondientes al Régimen Nacional de Obras Sociales, no permite entender que se trate de una escisión del componente de aportes previsionales de los Recursos de la Seguridad Social en sí.

En fecha 1° de noviembre de 2022, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, confirmó el auto apelado.

La cámara a quo comenzó por aseverar que "...no existe discusión en relación a la existencia de una deuda pendiente respecto de los aportes retenidos y no depositados destinados al sistema de obra social -8 a 12/2014, 1/2015, 7/2015, 9 a 12/2015, 1 a 4/2016, 7 a 12/2016, 1 a 12/2017, 1 a 8/2018, 9 y 10/2018-...".

Asimismo, sostuvo que tampoco existía discusión "...acerca de que esos montos mensuales pendientes de pago no alcanzan, por sí sólo, al previsto por el legislador como condición objetiva de punibilidad del tipo penal imputado".

Sobre el particular, el a quo consideró que el sistema único de seguridad social está integrado por los dos distintos subsistemas (régimen nacional de obras sociales y régimen previsional) con la finalidad de dar cobertura a las diferentes contingencias correspondientes a la seguridad social, debiendo considerarse desde un aspecto dogmático penal como un único hecho.

En ese contexto, el pronunciamiento recurrido se abocó a determinar "...el alcance que debe darse a las disposiciones de emergencia dictadas por el legislador en







## *Cámara Federal de Casación Penal*

la ley 27.541 y sus modificatorias, al haber incluido exclusivamente uno de los subsistemas del hecho único previsto por la norma penal".

A mayor abundamiento, afirmó que "...este tipo de normas son leyes de perdón o amnistía fiscal y como tales son de carácter estrictamente excepcional, ya que consagran una renuncia circunstancial del Estado en su potestad penal, fundado en un requerimiento grave de interés público y político".

En esa línea, el a quo meritó que en el caso de la ley 27.541 el perdón previsto por el Poder Legislativo ha sido parcial; sostuvo que el legislador ha decidido que, cumplidas las circunstancias expresamente contempladas en la ley, se elimina la "perseguidibilidad" penal de uno de los componentes típicos del hecho imputado, subsistiendo el otro.

En razón de lo anterior, la decisión recurrida concluyó: "Así, al momento de analizar los efectos del pago en los términos de la ley en estudio con relación al hecho penal, se advierte que, en el presente caso, el perdón brindado por el legislador ha eliminado la tipicidad del hecho imputado, toda vez que el monto no previsto en la amnistía no alcanza para que la conducta sea considerada delito, manteniéndose una deuda sobre cuya responsabilidad o exigibilidad no puede pronunciarse este Tribunal por ser un tema ajeno a este expediente".

Y precisó: "En lo que se refiere al específico caso de autos, donde, como se adelantó, los elementos del delito no alcanzados por la amnistía no llegan a la condición mínima de punibilidad previsto por el Régimen Penal Tributario, el acogimiento de los encartados en los





## *Cámara Federal de Casación Penal*

términos de la ley 27.451 modificada y ampliada por las leyes 27.562 y 27.563, produjo el perdón parcial de la conducta desplegada en relación al período 08/2014 a 10/2018, referido al ilícito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, debiendo homologarse la decisión recurrida".

Contra ese pronunciamiento, la querella - A.F.I.P.- interpuso el recurso de casación bajo análisis.

**III.** Abocado a la cuestión a resolver, en atención a las particulares circunstancias del caso, habré de memorar -en lo pertinente y aplicable- lo oportunamente expresado por el suscripto en las causas CPE 1114/2018/10/CFC1, "Jaureguiberry, Horacio Arturo s/recurso de casación", Sala IV C.F.C.P. (reg. n°1429/2022, rta. el 24/10/2022); CPE 774/2019/2/CFC1, "GOLDEN JEANS 26 S.A. s/recurso de casación", Sala III C.F.C.P. (reg. n°147/23, rta. el 06/03/2023); y CPE 738/2018/5/CFC1, "ROWING S.A. s/recurso de casación", Sala III C.F.C.P. (reg. n°142/2023; rta. el 06/03/2023).

En aquellas ocasiones, recordé que el art. 7 del Régimen Penal Tributario (art. 279 de la ley 27.430) establece "Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes con destino al sistema de la seguridad social, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cien mil pesos (\$ 100.000), por cada mes...".

El Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) fue creado por el artículo 85 del decreto 2284/91 y se





## *Cámara Federal de Casación Penal*

integra con cinco subsistemas: el previsional, denominado SIPA; el de salud, que comprende las obras sociales (regidas por la ley 23.660) y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Pensionados y Jubilados; el de prestaciones por desempleo; el de asignaciones familiares; y el de riesgos de trabajo.

Al respecto, expresé: *"la seguridad social se presenta como un sistema destinado a proteger a las personas de las contingencias [...] de la vida, desde el nacimiento hasta el fallecimiento. Este sistema está conformado por subsistemas específicos en función de la naturaleza de la contingencia que están destinados a cubrir"*. En lo atinente a cuáles de los rubros que componen el SUSS se encuentran alcanzados por la protección penal *"se estableció que sí integraba al concepto de seguridad social [...] el porcentaje retenido correspondiente a los aportes de las obras sociales"* (cfr. BORINSKY, Mariano Hernán; TURANO, Pablo Nicolás; RODRÍGUEZ, Magdalena; y SCHRUIJN ALMENAR, Daniel; *Delitos Tributarios y contra la seguridad social*; Rubinzal Culzoni; Santa Fe; 2020; págs. 93 y 331).

Ahora bien, el art. 8 de la ley 27.541 (texto según ley 27.562 -B.O. 26/8/20-) dispone que *"Los contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas*





## *Cámara Federal de Casación Penal*

tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo".

Esa misma norma establece que "...Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales...", con la siguiente previsión: "...Invítase a las obras sociales y a las aseguradoras de riesgos de trabajo a establecer programas de regularización de deudas en condiciones similares a las previstas en el presente capítulo...".

A su vez, el primer párrafo del art. 10 de la misma ley 27.541 (modificada por la ley 27.562), determina que "...El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las autoras, los coautores o las coautoras y los partícipes o las partícipes del presunto delito vinculado a las obligaciones respectivas, aun cuando no se hubiere efectuado la denuncia penal hasta ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando esta no tuviere sentencia firme".

Por su parte, el segundo párrafo de dicho artículo 10 prevé: "La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago producirá la extinción de la acción penal tributaria o penal aduanera, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto producirá





## *Cámara Federal de Casación Penal*

*respecto de aquellas obligaciones de idéntica naturaleza a las mencionadas, que hayan sido canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley modificatoria, incluidas, en este supuesto, las inherentes al Régimen Nacional de Obras Sociales..."*.

Del análisis de las normas transcriptas se concluye que, si bien se excluye del régimen de regularización a las deudas por aportes retenidos con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales (art. 8), la propia ley contempla la cancelación de tales conceptos para acceder a los beneficios penales allí establecidos (art. 10, segundo párrafo, texto según ley 27.562).

Asimismo, habré de reiterar que, si bien se aprecia que la ley 27.541 (modificada por la ley 27.542) realiza un tratamiento particularizado de los rubros que integran la seguridad social, ello no se traduce en una escisión conceptual de la conducta omisiva tipificada para el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social (cf. el artículo 7 del actual Régimen Penal Tributario -artículo 279 de la ley 27.430-), sino que obedece a los diferentes marcos regulatorios de aquellos subsistemas. Demostrativo de lo expuesto es que *"con relación a las obras sociales los poderes de verificación y fiscalización permanecen en cabeza de dichas entidades de acuerdo a lo previsto en el art. 21 de la ley 23.660"* (cfr. Mariano Hernán Borinsky, Pablo Nicolás Turano, Magdalena Rodríguez y Daniel Schurjin Almenar, ob. cit., pág. 96).

Desde esta perspectiva, no se encuentra debidamente fundada la aseveración realizada en el pronunciamiento impugnado -sobre la que pretende erigirse





## *Cámara Federal de Casación Penal*

la decisión- en cuanto a que "...en el caso de la norma analizada [27.541] el perdón previsto por el Poder Legislativo ha sido parcial, ya que ha decidido que, cumplidas las circunstancias expresamente contempladas en la ley, se elimina la perseguibilidad penal de uno de los componentes típicos del hecho imputado, subsistiendo el otro". Por el contrario, la citada afirmación significa una escisión conceptual de la conducta omisiva tipificada para el delito de la apropiación indebida de recursos de la seguridad social; interpretación incompatible con el marco normativo vigente y aplicable al caso, por las razones precedentemente expuestas.

Aún más, no debe soslayarse que en el presente caso la A.F.I.P. informó que la firma "Nordel Movie S.A." no ha cancelado la deuda generada por la falta de depósito de los aportes de Obra Social para los períodos 08/2014 a 01/2015, 07/2015, 09/2015 a 04/2016, 07/2016 a 07/2018 y 09/2018 a 10/2018; circunstancia que priva de sustento argumental a la resolución puesta en crisis, a la luz de lo normado por el artículo 10, segundo párrafo, de la ley 27.541 -según ley 27.562- y de las propias constancias de la causa.

En tal contexto, las críticas formuladas por la parte impugnante y por el señor representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia evidencian que en este caso se configuró un supuesto de arbitrariedad de sentencia (conf. C.S.J.N. Fallos: 331:1090; 331:583, entre muchos otros), en tanto la resolución impugnada no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las particulares constancias comprobadas de la causa y, en consecuencia, no puede ser considerada como





## *Cámara Federal de Casación Penal*

acto jurisdiccional válido (arts. 123 -a contrario sensu- y 167, inc. 2° del C.P.P.N.).

**IV.** Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la querella - A.F.I.P.-, ANULAR el decisorio impugnado en cuanto fuera materia de recurso y REMITIR las actuaciones al juzgado de origen -previo paso por la cámara a quo- a sus efectos. Sin costas en la instancia (arts. 530 y cc. del C.P.P.N.).

El señor juez **Daniel Antonio Petrone** dijo:

Por compartir en lo sustancial los argumentos expuestos por el colega que me antecede, doctor Mariano Hernán Borinsky, y en atención a que en la especie también se verifica un defecto de sustanciación en torno al derecho a ser oído respecto de la articulación resuelta por parte de la recurrente, adhiero a la solución allí propuesta.

Tal es mi voto.

El señor juez doctor **Gustavo M. Hornos** dijo:

Con remisión a los antecedentes del caso planteado que han sido reseñados en el primer voto, coincido en lo sustancial con la solución propuesta.

En efecto, tal como se lo ha señalado, y en lo ahora pertinente al tipo penal previsto en el artículo 7 del Actual Régimen Penal Tributario, la retención indebida de recursos del Régimen de la Seguridad Social debe considerarse dogmáticamente como un hecho único respecto a cada período de los que se trate, teniendo en cuenta que el Sistema Único de la Seguridad Social, creado por el artículo 85 del Decreto 2284/91, se encuentra integrado por cinco subsistemas en relación a la naturaleza de la contingencia que están destinados a cubrir, entre ellos los aportes pertinentes a las obras sociales. Aspecto que no se





## *Cámara Federal de Casación Penal*

traduce en una escisión conceptual de la conducta omisiva descripta en la ley como delito.

En concordancia con ello, del análisis armónico de lo dispuesto por los artículos 8 y 10 de la ley 27.541 (con la modificación operada por la ley 27.562), corresponde concluir que el tratamiento diferenciado en cuanto al régimen de regularización de las deudas por aportes retenidos con destino al Régimen Nacional de las Obras sociales (art. 8), que contempla la cancelación de tales conceptos para acceder a los beneficios previstos (art. 10, segundo párrafo), no autoriza a escindir infundadamente la plataforma fáctica objeto de imputación, a luz del tipo penal objetivo del delito en cuestión.

En orden a lo expuesto, la conclusión del a quo de que se ha eliminado la perseguibilidad penal "de uno de los componentes típicos del hecho imputado", en lo relativo a los aportes previsionales para los períodos 08/2014 a 10/2018, y la consecuente suspensión parcial del proceso a ese respecto, cuando quedaba subsistente la deuda en concepto de aportes al Régimen de Obra Social de los períodos (08/2014 a 01/2015, 07/2015, 09/2015 a 4/2016, 07/2016 a 07/2018 y 09/2018 a 10/2018), no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las particulares circunstancias comprobadas de la causa, falencia que impide su consideración como acto jurisdiccional válido (arts. 123 y 167, inciso 2, del C.P.P.N.).

Propicio entonces que se haga lugar al recurso de casación interpuesto por la parte querellante, que se anule la resolución impugnada en cuanto fuera materia de recurso y se remitan las actuaciones al juzgado de origen -previo







## *Cámara Federal de Casación Penal*

paso por la cámara a quo- a sus efectos. Sin costas en la instancia (arts. 530 y cc. del C.P.P.N.).

Por ello, en mérito al Acuerdo que antecede el Tribunal, **RESUELVE:**

**HACER LUGAR** al recurso de casación interpuesto por la querella -A.F.I.P.-, **ANULAR** el decisorio impugnado en cuanto fuera materia de recurso y **REMITIR** las actuaciones al juzgado de origen -previo paso por la cámara a quo- a sus efectos. Sin costas en la instancia (arts. 530 y cc. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/19, C.S.J.N.) y remítase mediante pase digital al Tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

